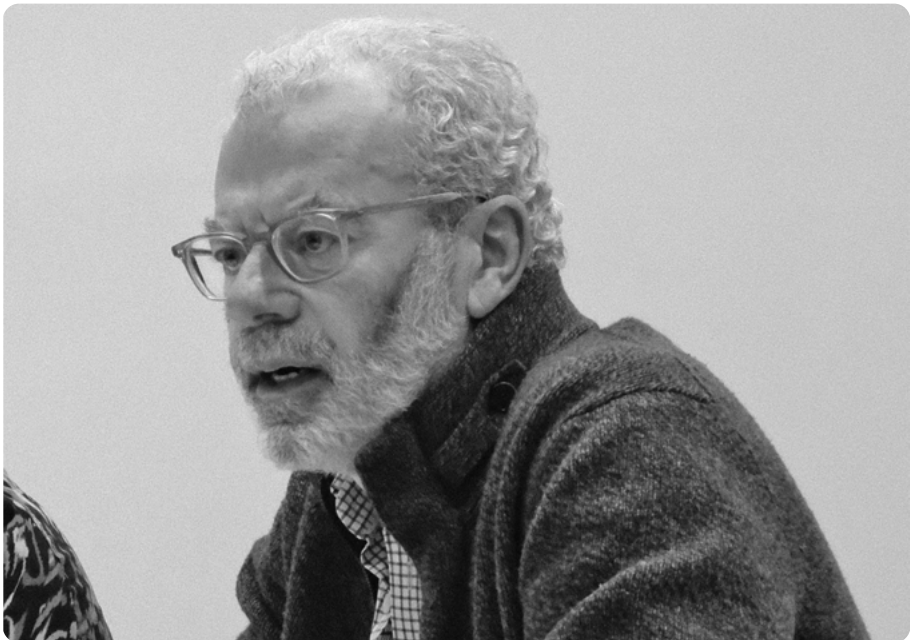




AMENAZAS Y CLAVES DE RESPUESTA FRENTE A LA CRISIS SISTÉMICA DE UNOS MODELOS AGOTADOS

JESÚS A. NÚÑEZ VILLAVERDE

Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria (IECAH)



Que vivimos tiempos difíciles es una obviedad que constatamos día a día, sin que la supuesta bendición china de desear precisamente algo así al prójimo nos sirva de consuelo frente a la inquietud generada por tantos frentes abiertos. No se trata solamente de Ucrania y Palestina, que actualmente copan casi en su totalidad la agenda mediática y política internacional, sino de tantos otros focos de conflicto violento y de tantas otras señales de deterioro de la convivencia, tanto dentro de muchos países como en regiones enteras y en el conjunto del planeta. Tampoco tranquiliza la lectura de los informes que con regularidad emiten diferentes organismos, tanto internacionales como estatales y de diferentes instancias de la sociedad civil, reflejando tanto el agravamiento de las amenazas y riesgos existentes como el retraso en la adopción de medidas para hacerles frente.

Del mismo modo, necesitamos nuevas cartas de navegación, ya no solo para orientar la gestión de los asuntos cotidianos sino para intentar encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan, es una imperiosa necesidad ante los desajustes que producen los modelos vigentes, responsables en gran medida de la situación actual. Unos modelos, tanto en su vertiente política, como económica, social o de seguridad que datan de finales de la II Guerra Mundial y que, en consecuencia, han quedado en gran medida desfasados para atender a los desafíos que nos plantea el actual marco de globalización desigual, acompañado de una profunda modificación de la relación de fuerzas de aquella época y de la aparición de nuevos instrumentos y tendencias que conllevan nuevos modos de hacer.

La sensación dominante se resume en que, a diferencia de etapas anteriores, el futuro es visto con generalizada aprensión y se impone la angustia de que nos acercamos, peligrosamente, a puntos de no retorno que ponen en peligro la existencia de la especie humana en este pequeño planeta. Una sensación que nace de un diagnóstico cada vez más preciso sobre las dificultades que nos aquejan y de una creciente incapacidad (aunque más bien cabría destacar la falta de voluntad) para actuar en consecuencia, anclados en un inútil cortoplacismo que ni siquiera sirve para evitar un acelerado deterioro en todos los órdenes. A eso se añade una innegable percepción de *déjà vu*, con episodios que se repiten nuevamente cargados con mayor potencial desestabilizador que nunca, en una nueva demostración de que el ser humano es el único animal capaz de tropezar una y otra vez con la misma piedra. Y hasta cabría añadir la no menos visible evidencia de que en no pocas ocasiones lo que se registra es un retroceso neto hacia posiciones y situaciones que creíamos superadas, como

bien queda ejemplificado con el auge del populismo, el ultranacionalismo y las posiciones xenófobas y abiertamente racistas que nos retrotraen a épocas muy oscuras de la historia.

Diagnóstico perturbador

Sin querer entrar en comparaciones con etapas históricas más violentas o más oscuras que la actual, el punto de partida para calibrar dónde nos encontramos es suficientemente inquietante. Sirva como muestra un somero repaso a las principales amenazas que hoy penden sobre nuestras cabezas.

Proliferación de armas de destrucción masiva (ADM)

En primer lugar, aunque solo sea por seguir un criterio cronológico y en referencia únicamente a las que cabe considerar de carácter existencial, cabe destacar la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), nucleares, químicas, biológicas y radiológicas. El problema es doble puesto que, en referencia a las armas nucleares, ha aumentado el número de países que cuentan con ellas y el de aspirantes a sumarse a ellos y, por otro, se ha debilitado claramente el marco de control para frenar su fabricación y posible uso. Si al final de la Guerra Fría eran seis las potencias nucleares (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, más un Israel que nunca ha reconocido su posesión) hoy ya son nueve (con el añadido de India, Pakistán y Corea del Norte), mientras Irán destaca entre los que aspiran a hacerse algún día con ellas.

Es cierto que, si a mediados de los años ochenta del pasado siglo había unas 63 600 cabezas nucleares, en enero de 2022 «solo» había unas 12 705; pero de inmediato basta con señalar que una ojiva moderna supera exponencialmente el poder destructivo de las antiguas para entender que esa reducción no es necesariamente una buena noticia. A eso se suma que están entrando en servicio nuevos ingenios como el misil planeador orbital nuclear hipersónico que China lanzó en agosto de 2021, capaz de superar cualquier defensa antimisil imaginable, junto a los que también ensaya Estados Unidos y Rusia, lo que hace pensar que la desaparición de las armas nucleares no está a la vuelta de la esquina.

En esa misma senda se encuentran otros países, como Reino Unido, que ha decidido elevar su techo máximo hasta las 260 cabezas (frente a las 180 actuales), China (con 350, aunque crece la percepción de que son muchas más y de que podría llegar a 1 000 al final de la presente década), India (de 156, en 2021, a 160 un año después) y Corea del Norte (con una estimación de 20

operativas y con material suficiente para armar 40-50). Mientras tanto, se asume que Francia, Israel y Pakistán mantienen las que poseían un año antes (290, 90 y 165 respectivamente), en tanto que Estados Unidos ha pasado de 5 550 a 5 428 y Rusia, por contra, se queda con 5 977 (6 255 un año antes).

Por lo que respecta al entramado de acuerdos de control de armas y desarme en el terreno nuclear, nuevamente se produce un efecto aparentemente contradictorio. Por un lado, cabe referirse a la entrada en vigor, el 22 de enero de 2021, del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), una vez que cincuenta países ratificaron su contenido con el objetivo de lograr un mundo libre de dichas armas. Más recientemente, el 3 de enero de 2022, los representantes de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia incluso decidieron publicar un comunicado conjunto en el que, como supuestos adalides de la paz mundial, dicen comprometerse a evitar que se pueda producir una guerra nuclear —que, insisten, nadie puede ganar— y a frenar la proliferación del ingenio más destructivo que ha creado la mente humana. En esa línea han proclamado su intención de hacer lo que sea necesario para impedir que esa guerra llegue nunca a librarse y, como si el propio comunicado resolviera por ensalmo sus notorias diferencias, se muestran convencidos de que a partir de ese punto se abre una etapa de alivio de las tensiones internacionales (Rusia *dixit*) y de mayor colaboración y cooperación internacional (según Pekín). No parece que los hechos más recientes en la escena internacional se correspondan con esas llamativas declaraciones.

La cruda realidad, por el contrario, nos muestra un panorama bien distinto. Además del ya mencionado y generalizado esfuerzo proliferador y modernizador de las actuales potencias nucleares y de quienes aspiran a serlo, por el camino se van perdiendo referencias fundamentales que, incluso en plena Guerra Fría, habían sido posibles entre rivales acérrimos. Ese es el caso, por ejemplo, del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, firmado en 1972 por Washington y Moscú y del que George W. Bush decidió salirse finalmente el 13 de junio de 2002, con intención de librarse de las limitaciones que le impedía desarrollar un nuevo sistema de defensa antimisiles. Lo mismo ocurrió con el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias, firmado en diciembre de 1987 y por el que ambas superpotencias acordaron eliminar el despliegue de misiles balísticos y de crucero de entre 500 km y 5 500 km en territorio europeo, hasta que Donald Trump, el 19 de agosto de 2019, decidió retirarse definitivamente, acusando a Rusia de haber violado sus cláusulas. La lista incluye también el Tratado de Cielos Abiertos, por el que, desde el 1 de enero de 2002, treinta y cuatro países (incluyendo Estados Unidos y Rusia) permitían el sobrevuelo de sus propios espacios aéreos al resto de firmantes para obtener información sobre la existencia de efectivos y la realización de maniobras militares. Con su decisión, adoptada el 22 de noviembre de 2020, Donald Trump arrojó a la

papelera un instrumento clásico de transparencia y de generación de confianza y seguridad, útil para mantener, al menos, unos mínimos canales de control mutuo entre rivales estratégicos.

Por su parte, el TPAN no ha sido firmado por ninguna de las nueve potencias nucleares existentes ni por ninguno de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Desgraciadamente eso lo convierte en un documento muy loable en su propósito, pero con escasas posibilidades reales de acelerar la eliminación de los arsenales nucleares del planeta. Y, del mismo modo, tampoco ha sido posible hasta ahora lograr la implementación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, dada la resistencia de China, Corea del Norte, Estados Unidos, India, Israel y Pakistán a ratificarlo y el reciente anuncio de Moscú sobre la intención de revocar su ratificación.

No parece, igualmente, que el Nuevo START, o START III, tenga un mejor futuro a la vista. Prorrogado *in extremis* hasta febrero de 2026 por Joe Biden, revirtiendo una decisión de su antecesor que parecía decidido a dejarlo morir, es el último hito de una larga serie de acuerdos en materia nuclear entre ambas superpotencias, desde el SALT 1 (firmado el 3 de octubre de 1972) —que, junto con el SALT 2 (firmado en 1979), inició la senda que permitió frenar parcialmente la proliferación de las armas estratégicas entre Washington y Moscú—, pasando por START I (1991) y START II (1993). Una senda que arrancó con la idea de establecer techos máximos para los arsenales de ambos países y que, en 2010, llegó a fijar un proceso de desarme —es decir, de destrucción efectiva de armas operativas— ya en el marco del START III.

En el contexto de la guerra de Ucrania ya ha habido ocasión de comprobar el desinterés de Moscú por implicarse en la negociación de un nuevo tratado, mientras Estados Unidos insiste, cada vez con mayor énfasis, en la necesidad de que un nuevo acuerdo sobre armas estratégicas debe contar también con la participación de China, algo que Pekín rechaza frontalmente, amparándose en el argumento de que no dará un paso de ese tipo hasta que las otras dos potencias no reduzcan sus arsenales hasta niveles similares a los suyos. A la espera de lo que pueda ocurrir hasta que termine la actual prórroga, la decisión tomada por Putin en febrero de 2023, suspendiendo totalmente la participación de Rusia hasta nuevo aviso, arroja un nuevo jarro de agua fría sobre un asunto tan enormemente delicado.

Finalmente, el TNP, pieza central de los esfuerzos no solo por evitar la proliferación nuclear, sino también de llegar a un mundo sin ese tipo de armas, no pasa por su mejor momento cincuenta y cuatro años después de su entrada en vigor. Por una parte, India, Israel y Pakistán siguen sin sumarse a los 191 países que, con la excepción reconocida a China, Estados Unidos, Francia,

Reino Unido y Rusia, han renunciado al empleo militar de la energía nuclear. Por otra, Corea del Norte —miembro del TNP hasta 2003— ha demostrado las limitaciones del Tratado al lograr engañar a los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, llevando a cabo actividades prohibidas hasta que, el 6 de octubre de 2006, realizó su primera prueba nuclear. En el caso de Irán tampoco ha logrado evitar que emprendiera un rumbo cada vez más problemático y ahora, tras la imposibilidad de volver a reactivar el acuerdo de junio de 2015, aumentan las sospechas de que Teherán puede estar traspasando umbrales que llevarían a un escenario regional altamente inflamable, con otros países como Arabia Saudí y Turquía tentados de seguir esa misma senda.

Para colmo, como se ha visto en su última conferencia de revisión, celebrada entre el 1 y el 26 de agosto de 2022, tampoco en esta ocasión fue posible alcanzar un acuerdo consensuado para emitir un comunicado final por el rechazo de Rusia al último borrador en el que había referencias a la situación en la central ucraniana de Zaporíyia con las que Moscú no estaba de acuerdo. Ha vuelto a quedar claro, en esencia, que el régimen de no proliferación corre el riesgo de quebrarse sin remedio. Y, entretanto, no hay ninguna novedad reseñable con la Convención sobre las Armas Químicas (en vigor desde 1997) y la Convención de Armas Biológicas (1975), ambas enfrentadas a enormes obstáculos para cumplir con su objetivo de eliminar totalmente esas dos categorías de ADM.

La emergencia climática

El final de la Guerra Fría propició una generalizada sensación de alivio internacional, lo que permitió repensar los riesgos a los que nos enfrentábamos y explorar nuevas formas de neutralizarlos. Entre ellos pronto cobró creciente importancia el cambio climático, tanto ligado con el crecimiento de la conflictividad como con los perniciosos efectos de una actividad humana centrada en un modelo de producción y consumo que generan un nivel de calentamiento del planeta potencialmente cataclísmico.

Por una parte, se percibe una creciente escasez de recursos vitales para sostener tanto el crecimiento demográfico registrado, cuando ya hemos superado los 8 000 millones de seres humanos en la Tierra, como para alimentar sin freno el dominante modelo económico liderado por los llamados países desarrollados. En el primer caso, lo que ya se viene produciendo desde hace años es un creciente desajuste entre la demanda generada por esa presión demográfica y la oferta de unos recursos renovables y no renovables que se están explotando de manera insostenible e irresponsable. En el segundo, se confirma a diario la dificultad para mantener un modelo que no solo esquilma el entorno, sin

preocuparse por la herencia que recibirán las generaciones venideras, sino que contamina y pone en peligro el delicado equilibrio ecológico del planeta. Los países más desarrollados, en particular, no parecen considerar con seriedad la necesidad de racionalizar la utilización de los recursos, mientras que la mayoría de los más desfavorecidos no hacen más que reproducir a escala ese mismo comportamiento, aunque solo sea por la falta de alternativas a corto plazo para cubrir sus necesidades más inmediatas.

Simultáneamente, se detectan ya carencias muy acusadas de recursos en ciertas zonas del planeta y luchas directas por su control, protagonizadas por grupos empresariales y por diversos gobiernos tanto para monopolizar su explotación como para ganar posiciones en un escenario internacional cada vez más competitivo. La falta de respuestas adecuadas a estos problemas viene parcialmente explicada por el hecho de que, a pesar de las aproximaciones realizadas desde diferentes ámbitos, sigue sin haber un modelo consensuado que ponga de manifiesto la relación causa/efecto entre el modelo de explotación económica actual, el deterioro medioambiental y el estallido de la violencia. Y de ahí que, con excesiva frecuencia, sean muchos los que optan por un escapismo que o bien niega la relación directa entre esas variables o bien imagina un futuro en el que, una vez más, se supone que el ingenio humano logrará superar las contradicciones del modelo, aportando soluciones tecnológicas a los problemas que genera su aplicación.

Por otra parte, el tímido desarrollo del derecho internacional no ha llegado a superar todavía las resistencias nacionalistas para lograr una efectiva injerencia en los asuntos internos de los Estados cuando se saltan las reglas de juego que nos hemos dado entre todos. Al igual que ocurre en otros terrenos, hoy por hoy es altamente improbable que un gobierno pueda ser obligado, desde ninguna instancia internacional, a modificar su política medioambiental, evitando la destrucción de sistemas ecológicos vitales o el uso irresponsable de los recursos. Por último, quienes ocupan actualmente una posición dominante tampoco muestran disposición a cambiar de modelo de explotación de unos recursos, que controlan directamente o a través de aliados que garantizan su acceso, vitales para mantener su posición de ventaja en la permanente lucha por el poder.

Desde esa perspectiva, es inmediato concluir que no resulta sostenible la explotación de los recursos existentes al ritmo actual, sin poner en peligro la vida tal como la entendemos. Del mismo modo, resulta claramente perceptible que la desigualdad en su uso y disfrute provoca crecientes tensiones entre grupos sociales y entre naciones. Mientras tanto, seguimos en plena expansión demográfica y las previsiones apuntan a que se mantendrá un alto ritmo de crecimiento en las próximas décadas (en 2022 nacieron 134 millones de

personas, mientras que fallecieron 67 millones) hasta llegar a los 10 400 millones en 2086, según las previsiones de la División de Población de Naciones Unidas.

Ya ha llovido mucho desde que, en 1992, se celebró la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, un encuentro que pretendía no solamente establecer un diagnóstico actualizado del problema que representa la contaminación atmosférica para el bienestar humano, sino también establecer una estrategia de respuesta para hacerle frente. Una ambición que quedó incumplida en gran medida por la falta de voluntad política de los 179 gobiernos nacionales representados en esa localidad brasileña para modificar las bases de unos modelos económicos que ya entonces se entendía que eran, al menos, uno de los principales responsables de dicho deterioro. Aun así, la citada Cumbre permitió aprobar el Programa 21, base fundamental para vislumbrar un desarrollo sostenible en el horizonte del siglo XXI, y de inmediato aprobar, entre otras, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, Nueva York, 1992).

Si la reacción inicial de muchos gobiernos nacionales basculó, cuando se convocó la mencionada Cumbre de la Tierra, entre cuestionar su existencia y considerarlo un tema para las generaciones futuras; posteriormente, cuando ya el consenso científico es unánime, son todavía demasiados los que siguen tratando desesperadamente de justificar su inacción apelando al desconocimiento sobre los costes e implicaciones a corto plazo de los planes de reforma de los vigentes modelos de desarrollo económico. Eso no significa que no haya ocurrido nada al respecto. De hecho, ahí está el Protocolo de Kioto (1997) y la Conferencia de Durban (2001) como hitos que han desembocado en el Acuerdo de París (COP 21, 2015).

Allí, en la capital francesa, los 195 Estados representados se plantearon el objetivo de evitar que la temperatura media mundial se eleve más de dos grados centígrados a finales del presente siglo con respecto a la temperatura media del planeta en el arranque de la revolución industrial (entendiendo que, de lo contrario, se habrá llegado a un punto de no retorno). Con esa idea se trataba de acordar compromisos concretos centrados en la reducción de las emisiones contaminantes responsables del efecto invernadero, afrontar el impacto negativo del cambio climático y ayudar a los países más afectados y necesitados (para lo que se prevé un Fondo Verde para el Clima, dotado con 100 000 millones de dólares anuales, aportados fundamentalmente por los países desarrollados).

Mientras que Kioto fijó compromisos obligatorios, estableciendo límites únicamente a las emisiones de los países desarrollados (lo que llevó a Washington a quedarse al margen), en París se ha optado por solicitar a cada gobierno

un plan voluntario de reducción. Pero, en términos reales, lo acordado en París no es de ningún modo un tratado internacional vinculante que pueda ser supervisado por un organismo multilateral, ni tampoco un instrumento que fije mecanismos reales para obligar a los Estados a cumplir estrictamente con lo que han anunciado en sus planes indicativos. En esencia, se trata de entender que en París no ha sido posible crear un mecanismo de vigilancia, para asegurar que todos cumplen lo acordado, y mucho menos de sanción, para castigar a quienes se salten los compromisos. Eso significa que, en la práctica, cada Estado se limitará a informar cada cinco años de sus niveles de emisión, preservando en todo momento la soberanía nacional ante cualquier reclamación exterior. Hasta el momento, ya son más de 170 los países que han presentado sus planes nacionales, aunque ni siquiera su pleno cumplimiento garantiza que se alcance el objetivo final. Entretanto, apenas hay rastro de los fondos anunciados para ayudas a los países menos avanzados en sus procesos de transición energética.

Por un lado, es obviamente positivo que, en su condición de máximos contaminadores mundiales, finalmente tanto Estados Unidos (tras la espantada puntual de Donald Trump) como China se hayan sumado al esfuerzo consagrado en París. Pero no cabe olvidar la dimensión del reto cuando se piensa, por citar un ejemplo, en la enorme dificultad para China e India de reducir su enorme dependencia del carbón como principal combustible para generar energía (con un 75 % y un 65 % del total, respectivamente). Y lo mismo sucede si se toma en consideración que, según determina el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la pretensión global supone pasar de una media actual de 5Tm de emisiones de gases de carbono per cápita (17,7 en Estados Unidos y en la Unión Europea) a menos de una, cuando en la actualidad solo en torno al 10 % del consumo mundial de energía procede de las llamadas energías renovables (la mayoría de origen hidroeléctrico y solo un 1,6 % de procedencia solar y eólica).

La disrupción tecnológica

Hoy asistimos asombrados a una sucesión de avances que supone superar retos y desafíos que hace muy poco tiempo nos parecían impensables fuera del mundo de la ciencia ficción. De ese modo, hemos llegado a un punto en el que resulta muy difícil imaginar un solo ámbito de nuestras vidas, tanto en el plano individual como en el colectivo, ajeno por completo a los sistemas de telecomunicaciones y de inteligencia artificial (IA) en todas sus dimensiones. Una realidad que significa, por un lado, que tenemos a nuestro alcance tecnologías que facilitan muchos aspectos de nuestra cotidianidad, pero también, por otro, que estamos expuestos a una extrema vulnerabilidad tanto en nuestra

privacidad personal como en los sistemas económicos, productivos, energéticos y de defensa que conforman nuestro mundo.

Yuval Noah Harari fue uno de los primeros en llamar la atención sobre lo que ya en su célebre *Homo deus* (2015) denominó disrupción tecnológica, identificándola explícitamente como una amenaza existencial que había que sumar a la de las armas de destrucción masiva y a la de la crisis climática. Una advertencia que, en mayo de 2023, ha llevado igualmente a que, desde el Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial, un grupo de 350 ejecutivos, expertos e investigadores en inteligencia artificial emitiera una carta abierta que alerta sobre el riesgo de extinción que su mal uso supone para la humanidad, reclamando la necesidad de mitigar dicho riesgo como una prioridad mundial. Se ha ido generando así una creciente inquietud en la que coinciden expertos como el propio Geoffrey Hinton, considerado como el padre de la IA y reconvertido en un reconocido activista sobre sus peligros, cuando afirma que «si hay alguna forma de controlar la inteligencia artificial, debemos descubrirla antes de que sea tarde», o Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, que reconoce que «mi peor miedo es que esta tecnología [la IA generativa] salga mal. Y si sale mal, puede salir muy mal».

Sin embargo, nada apunta a corto plazo que se vaya a activar la suficiente voluntad política para establecer, al menos, una moratoria en su desarrollo, antes de que escape al control de sus propios creadores, ni, mucho menos, para lograr un acuerdo internacional que regule su desarrollo. Y esto último es un pésimo augurio porque, a diferencia de lo que ocurre en los dos casos analizados anteriormente —en los que, mal que bien, existen al menos un Tratado de No Proliferación y un Acuerdo de París—, en este terreno no disponemos de ningún instrumento internacional con nombre propio que pueda servir como potencial freno a lo que tanto actores privados como públicos están propiciando en búsqueda de beneficios económicos y de ventajas en la eterna competición por obtener una mayor cuota de poder frente a otros.

Y así, mientras seguimos confirmando la falta de voluntad para dar un paso decidido para alumbrar algún tipo de acuerdo, obviamente la tecnología sigue su curso, en un proceso alimentado por consideraciones tanto comerciales como políticas, contando con que quienes ya la poseen están muy interesados tanto en aprovechar esos nuevos nichos de mercado para obtener pingües beneficios económicos, como para obtener ventajas sobre sus competidores y enemigos. La batalla (porque de eso se trata) abarca muchos frentes distintos. Por un lado, queda por ver cómo afectará el desarrollo de la computación cuántica, la IA y el Big Data a nuestra privacidad, con gobiernos y empresas desesperadamente interesados en saberlo todo sobre cada uno de nosotros, sea para conocer y determinar nuestras opiniones políticas o para incitarnos al consumo de determinados productos. Lo mismo cabe plantear en relación

con las armas autónomas, los avances en biotecnología, la desinformación y la propaganda, la competencia por acaparar las materias primas básicas para la fabricación de los componentes tecnológicos críticos y por dominar los mercados más atractivos, o el impacto en el mercado laboral.

En relación con este último ámbito, los datos van demostrando que, al menos de momento, no se están creando tantos nuevos puestos de trabajo como los que se destruyen precisamente como resultado de esos avances. Una tendencia que, en última instancia, pone en claro riesgo la paz social en la medida en que hemos asumido hasta ahora que la integración en el mercado laboral es la vía principal por la que la mayor parte de las nuevas generaciones terminan por asumir la defensa del *statu quo* vigente en la medida en que consideran que tienen sitio en el juego. Pero si terminan por entender que no solo la precariedad pasa a ser un rasgo estructural del modelo, sino que directamente pueden quedar totalmente fuera de juego, desplazados por máquinas y sistemas más productivos, ¿cómo podrán neutralizarse las ansias rupturistas de quienes ya no perciban ninguna ventaja en el mantenimiento de un orden social, político y económico que no les reserva espacio alguno? ¿Qué hacer con los millones de no consumidores y no trabajadores, tentados de llevarse por delante, incluso violentamente, un sistema que no los representa y en el que no se sienten incluidos?

Lo que tenemos a partir de esos mínimos datos no es nada tranquilizador. Por una parte, la toma de conciencia sobre la gravedad de la amenaza que representa la disrupción tecnológica (una denominación todavía en proceso de consolidación) no parece ir acompañada en el horizonte inmediato del arranque de una dinámica política y diplomática de alcance global para lograr algún acuerdo que permita gestionar su desarrollo por cauces que no pongan en peligro ni el marco de libertades fundamentales propio de una sociedad democrática, ni la posibilidad de que su mal uso pueda hacer colapsar el sistema social, político y económico sobre el que estamos asentados. Y, por otra, se perfila una batalla en toda regla por el liderazgo en este terreno, de la que no cabe excluir incluso el componente militar. Basta imaginar para ello un escenario en el que China termine por lanzar una invasión de Taiwán, con objeto de controlar unos activos industriales claves para su desarrollo y el del resto del mundo, o el lanzamiento de una andanada de misiles capaces de destruir las plantas fabriles de la empresa TSCM. ¿En qué deriva belicista nos metería algo así?

Otras amenazas

Un simple repaso de los documentos públicos que desde principios de siglo publican regularmente algunos países (entre ellos España) sobre sus

estrategias nacionales de seguridad arroja luz sobre la presencia de muchas otras amenazas y riesgos, no existenciales, pero no por ello menos preocupantes. Así, una vez tras otra aparecen mencionados sin un claro orden de prelación los flujos migratorios descontrolados, las pandemias, el potencial desestabilizador de los Estados fallidos, la exclusión en todas sus manifestaciones, el terrorismo internacional, el crimen organizado o las ciberamenazas y las campañas de desinformación.

Todo ello dibuja un panorama nada satisfactorio, no solo por la gravedad intrínseca de cada una de ellas, sino también porque su mera existencia habla a las claras del fracaso de los modelos e instrumentos utilizados para neutralizarlas. Más aun, crece la sensación de que muchos de los problemas que conforman nuestra realidad actual son precisamente el resultado directo de dichos modelos.

Cartas de navegación obsoletas

Lo que más nos puede interesar del análisis de esas amenazas y riesgos, desde una perspectiva centrada en la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos, es que:

- Ningún país en solitario, y eso incluye tanto a Estados Unidos como a cualquier otra potencia, tiene la más mínima posibilidad de salir airoso del impacto de cualquiera de ellas. De esa evidente constatación se deduce racionalmente la imperiosa necesidad de sumar fuerzas entre todos los que dicen estar comprometidos con un mundo más justo, más seguro y más sostenible. Y eso, en lenguaje simple, se llama multilateralismo. Un multilateralismo al que si no se llega por sentirse partes de un todo que nos define y nos afecta, se debe llegar por pura necesidad, en la medida en que el instinto de supervivencia nos haga ver que solos no llegamos muy lejos.
- Cuando se estudian las causas que generan y alimentan dichas amenazas resulta inmediato constatar que todas ellas hunden sus raíces en factores sociales, políticos y económicos, así como en la existencia de dobles varas de medida a nivel internacional y de fracasos de convivencia entre distintos grupos que comparten un mismo territorio. De ahí se extrae la conclusión de que, aun en aquellos casos en los que la violencia ya ha estallado, resulta imposible eliminarlas exclusivamente con instrumentos militares. En otras palabras, para neutralizar su potencial desestabilizador es necesario articular un esfuerzo sostenido de largo plazo que combine multidimensionalmente los instrumentos

sociales, políticos, diplomáticos, económicos y de seguridad. No basta, como ocurre con tanta frecuencia, con parchear los problemas existentes activando una respuesta militarista que nunca puede atender adecuadamente a las situaciones estructurales que sirven de caldo de cultivo para alimentar procesos que pueden conducir a estallidos generalizados de violencia.

En definitiva, multilateralismo y multidimensionalidad son las dos referencias principales que nos deben servir para determinar si estamos en el rumbo correcto, manejando unas cartas de navegación útiles para aspirar a un mundo mejor. Y la respuesta inmediata, a la luz del diagnóstico apuntado en el apartado anterior —mientras aumentan peligrosamente la inestabilidad y la conflictividad global, así como las brechas de desigualdad a escala nacional, regional y mundial entre los que tienen y los que no tienen—, es que dichas cartas resultan alarmantemente desactualizadas y, por tanto, son ineficaces, cuando no perversas.

Esa sensación se impone, en primer lugar, cuando se fija la mirada en el legítimo representante de la comunidad internacional. La ONU ha ido languideciendo desde que en la última década del pasado siglo pareciera recuperar el brillo que acompañó su nacimiento tras el brutal impacto de la II Guerra Mundial. El aciago 11S y la entrada en la unilateral y nefasta «guerra contra el terror» liderada por Washington terminó por enterrar aquella esperanza, y desde entonces ha ido perdiendo aún más peso, lastrada por un proceso de toma de decisiones y una composición de sus principales órganos que ya no sirven para garantizar la gobernanza de la actual globalización. Al igual que le ocurre al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio y a tantas otras instancias nacidas en el arranque de la Guerra Fría con competencias en el terreno político, diplomático, económico y de seguridad, la ONU es el reflejo de una relación de fuerzas que no resulta representativa del mundo de hoy. Y, por supuesto, quienes más se han beneficiado del reparto de las cartas en aquellos momentos, con Estados Unidos a la cabeza, no tienen intención ninguna de perder los privilegios que entonces lograron. En contraposición, los que entonces no tenían peso alguno (como China), ahora quieren que se les reconozca su creciente poderío, sea por la vía de un mayor porcentaje de votos en los organismos internacionales existentes o amenazando con crear otras instancias paralelas y otros bloques que acaben rompiendo los consensos mínimos logrados hasta ahora.

Tampoco han servido para mejorar la gobernanza mundial sucedáneos como el G-7 o el G-20, y menos aún los BRICS (incluso con sus recientes incorporaciones, apenas es un intento de Pekín por liderar un club de países molestos con el dominio de Estados Unidos) o el tan ampuloso como vacío de contenido Sur Global (todavía por definir, más allá del malestar compartido

con un *statu quo* en el que no se sienten adecuadamente representados). Y así, aunque la inadecuación del entramado institucional internacional resulta cada día más evidente, seguimos a la espera de que algo produzca un giro radical que ni siquiera la pandemia ha conseguido provocar, mientras el modelo económico dominante agota su potencial sin resolver los problemas que su apuesta por el mercado y el debilitamiento de los Estados han provocado, dejando a mucha gente atrás, en contra de tantos discursos vacíos que dicen buscar lo contrario.

En resumen, asistimos a la imparable marginación de la ONU por falta de voluntad de algunos de sus Estados miembros para permitir una reforma que se retrasa *sine die*. De igual forma, y solo a modo de ejemplo, vemos cómo muchas de las agencias internacionales, como ACNUR y la UNRWA, se enfrentan a crecientes apuros para poder cubrir sus programas con unos presupuestos que dependen de las aportaciones voluntarias de los Estados y, en el segundo caso, hasta peligra su existencia como efecto combinado del esfuerzo que lideran EE. UU. e Israel por diluir el problema que representan los 5,7 millones de refugiados palestinos que aspiran a ver reconocido el derecho al retorno. En paralelo, la Unión Europea parece apostar por medidas cada vez más restrictivas para controlar sus fronteras, condenadas al fracaso para frenar la desesperación de quienes no aceptan pasivamente su mala suerte, en lugar de entender la necesidad de contribuir al desarrollo de quienes no pueden aspirar a una vida digna en sus lugares de origen.

En esa misma senda desnortada cabe destacar la renovada apuesta por la securitización de la agenda internacional —con la OTAN nuevamente revitalizada tras la invasión rusa de Ucrania— y por el incremento de los gastos militares, como si esa fuese la vía principal para mejorar la situación. Los datos aportados un año más por el reconocido Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) no dejan lugar a dudas: el gasto militar mundial ha vuelto a batir en 2022 un récord histórico al alcanzar la cifra de 2,24 billones de dólares. Un registro que supone un incremento del 3,7% en términos reales (6,5% en términos nominales) respecto al año anterior y la continuación, por octavo año consecutivo, de la tendencia alcista.

Para quienes piensan que cuantas más armas posean mayor será el nivel de seguridad alcanzado ese dato podría suponer una buena noticia, en la medida en que supone disponer de más medios para defenderse de cualquier posible amenaza a los intereses propios y de mayor capacidad de disuasión frente a potenciales enemigos. Sin embargo, en cuanto se repasan los datos sobre el número de conflictos que asolan el planeta es inmediato concluir que, siguiendo los datos de la Escuela de Cultura de Paz, de Barcelona, si en 2002 había veinticinco focos activos en diversas partes del planeta, en 2022 eran treinta y dos. Y, aunque la complejidad del fenómeno violento no se puede reducir a

una sola clave, parece elemental concluir que, visto tanto a escala global como local, la posesión de más armas no supone más seguridad; sobre todo, si no se entiende que el incremento del capítulo militar en un Estado suele ser visto como una amenaza a la seguridad por parte de los vecinos.

En todo caso, hoy, con la guerra en Ucrania y las tensiones en la zona Indo-Pacífico como impulsores más potentes, todas las regiones del planeta, con la excepción de Latinoamérica y África, están experimentando aumentos significativos de sus presupuestos de defensa. Una tendencia en la que vuelve a parecer Estados Unidos (con 877 000 millones de dólares, lo que supone un alza del 0,7 % respecto a un año antes) como el protagonista principal, acaparando el 39 % del total, seguido de China (292 000), concentrando el 13 % del total, con el matiz añadido de que, mientras Washington ha registrado algunos vaivenes a la baja en lo que llevamos de siglo, Pekín sigue en una senda alcista ininterrumpida desde hace, al menos, veintiocho años (cuando el SIPRI comenzó a publicar estos datos). Si a estos países se le suma Rusia (con un aumento anual del 9,2 % para llegar a los 86 400 millones) el resultado sería que entre los tres mencionados ya representan el 56 % del gasto militar mundial.

Más allá de esos gigantes —a los que inmediatamente hay que sumar India (81 400 millones de dólares), Arabia Saudí (73 000) y Japón (46 000)— la suma de los presupuestos de todos los países europeos alcanza los 345 000 millones de dólares, lo que significa un alza del 13 % respecto a 2021, acumulando un incremento del 30 % en sus presupuestos de defensa desde 2013. Entre todos ellos, Ucrania es el país que registra un mayor incremento interanual, con un 640 %, hasta llegar a los 44 000 millones de dólares, con Estados Unidos, como principal apoyo externo, con 19 900 millones en ayuda militar. Eso supone que el gasto en defensa ucraniano equivale al 34 % de su PIB (era un 3,2 % un año antes), muy por encima del peso que dicho capítulo tiene para las tres principales potencias militares del planeta (entre el 2 y el 4 %) y del objetivo que la OTAN se había marcado en 2014 para llegar al 2 % una década después. En esa misma categoría de países europeos que apuestan por reforzar notablemente su músculo militar se añaden Finlandia (+36 %), Lituania (+27 %), Suecia (+12 %) y Polonia (+11 %).

Además de esas dinámicas globales también a escala regional se perciben movimientos similares, como el que afecta a Argelia y Marruecos, empeñados desde hace tiempo en una disputa por el liderazgo en el Magreb. Dos países que siguen entendiendo que el poder militar es la palanca principal para alcanzar su objetivo, sin entender que su comportamiento no hace más que aumentar su propia inestabilidad y la de sus vecinos, lo que inevitablemente también repercute en España, sin que ese empeño les sirva para solucionar ninguno de sus problemas internos ni los contenciosos que enfrentan a ambos países. Un ejemplo más de lo que también ocurre en el caso de Grecia y Turquía, India

y Pakistán o Arabia Saudí e Irán y más recientemente entre Israel y los países vecinos.

Y así, mientras solo cabe prever nuevos aumentos en función de los anuncios realizados por potencias tan relevantes como Alemania, Japón o Australia, sigue menguando el esfuerzo en prevención de conflictos y en potenciación de las capacidades de la ONU y otras organizaciones regionales para encarar las causas estructurales que constituyen el caldo de cultivo de tantos estallidos de violencia. Hoy como ayer sigue prevaleciendo un esquema centrado en la seguridad de los Estados que entiende equivocadamente que, en un mundo cada vez más complejo y con focos de amenaza más y más determinantes, la mejor respuesta pasa por dotarse de más medios militares, como si las armas tuvieran la capacidad de resolver los problemas sociales, políticos y económicos que en realidad explican la violencia en la mayoría de los casos.

El hecho, en definitiva, es que la aplicación de ese anquilosado modelo ha acabado perfilando un panorama internacional de abierta competencia entre Estados Unidos y China, con una enorme capacidad de arrastre militarista sobre muchos otros países, mientras se siguen acumulando señales inquietantes tanto en el terreno de la emergencia climática como en el de la proliferación de armas de destrucción masiva, mientras aumenta el número de personas que sufren malnutrición crónica, viven en la extrema pobreza y se ven obligadas a abandonar sus hogares por un conflicto violento o una catástrofe. Todo ello mientras, sumidos en una seria crisis que hace cada vez más evidente que el modelo político (democracia parlamentaria) y económico (economía de mercado) ha tocado techo y genera simultáneamente una notable pérdida de atractivo (sea con caídas sucesivas en los porcentajes de participación electoral o con alternativas tan inefables como el desacomplejado modelo «democrático» chino o ruso) y unas mayores brechas de desigualdad en el marco de una globalización en la que son muchos más los que pierden y se quedan atrás que los que ganan. Como consecuencia, aumenta el hartazgo y la insatisfacción de amplias capas de población que no se sienten representadas por sus gobernantes y que, poniendo en riesgo la paz social, se sienten crecientemente tentadas de adoptar posiciones revolucionarias o rupturistas.

Hay otro camino

A pesar de que el discurso dominante insiste en que no hay alternativa (amparándose en el clásico «se hace lo que se debe hacer»), sin salirnos de la realidad —planteando opciones que teóricamente pueden resultar muy atractivas, pero que resultaría imposible implementar hoy—, es preciso volver a

insistir en que hay campo para explorar otros caminos. De hecho, ya están aquí, sin que sea necesario para ello crear una nueva organización internacional que anule y sustituya a las existentes, o establecer un nuevo tratado o acuerdo que mejore a los que ya están en vigor. En el fondo, la clave está, más que en nuevas capacidades, en activar la voluntad política necesaria para que dichas instituciones cumplan con sus mandatos originales y para que los Estados cumplan con lo que ya han firmado hasta ahora. De ese modo, aun con todas las deficiencias que se le presuponen a cualquier obra humana, nos encontraríamos en una situación mucho más acorde con los valores y principios que decimos defender.

En esa línea, insistiendo en la idea de que otro mundo es posible, cabe plantear tres apuntes básicos para reorientar el esfuerzo multilateral y multidimensional que haga factible la materialización de esa aspiración.

El primero hace referencia al concepto de seguridad humana, entendido no tanto como un sustituto de la seguridad de los Estados, sino como un complemento al mismo nivel de importancia que busca ensanchar el campo de visión (y de acción) considerando que tan relevante es la defensa de las fronteras y del territorio ante potenciales amenazas externas como la paz social y el bienestar en el propio país. Un concepto que ya desde el momento en el que el PNUD le dio carta de naturaleza, en 1994, identifica a las personas como el principal foco de atención de toda agenda política a cualquier nivel, entendiendo que su bienestar y su seguridad deben ser las bases de partida de un orden internacional que vaya mucho más allá de la defensa de las fronteras y el ansia de dominio de unos sobre otros. En sus múltiples dimensiones —económica, alimentaria, salud, ambiental, personal, comunitaria y política— la seguridad humana propone una agenda que no solo pretende garantizar una vida digna a los 8 000 millones de pobladores de este pequeño planeta, sino que también sirve para consolidar la paz social en cada Estado y, por extensión, en cada región y en el mundo entero.

Al poner en el centro de atención al ser humano, este nuevo enfoque considera que la base principal de la paz y la seguridad está en la satisfacción de las necesidades básicas de cada persona, en hacer posible que pueda ejercer plenamente sus derechos sociales, culturales, políticos y económicos y en que esté gobernada por autoridades legítimas. Implica, en esencia, asumir que la seguridad propia no puede lograrse a costa de la seguridad del vecino y que no cabe dejar a nadie atrás; de ahí que tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la Agenda 2030 y el documento «Nuestra Agenda Común», presentada por Antonio Guterres en 2021, deban ser considerados como elementos centrales de esa misma aspiración. Aun así, en el terreno de los hechos, no hay más remedio que aceptar que hasta ahora son muy contados los casos en los que algún gobierno nacional —como acaba de hacer Colombia con su nueva Política

de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026, «Garantías para la vida y la paz», basada directamente en la premisa de proteger la vida de todos sus ciudadanos— se haya decidido a dar un paso de esas dimensiones.

El segundo apunte nos retrotrae a marzo de 2005, cuando el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, dio a conocer el informe titulado «Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos». En su formulación más abreviada, dicho documento plantea que no puede haber desarrollo sin seguridad, no puede haber seguridad sin desarrollo y no puede haber desarrollo ni seguridad si no hay respeto pleno de los derechos humanos para todos. Entendiendo que esos tres elementos constituyen los pilares fundamentales de un nuevo orden internacional, la tarea a realizar incluye la modificación de los principales órganos de la ONU, convirtiendo al Consejo Económico y Social en una instancia ejecutiva en el ámbito del desarrollo (y no solo consultiva, como ocurre en la actualidad) al mismo nivel que el Consejo de Seguridad en el campo de la paz y la seguridad. Del mismo modo, supone llevar a cabo una seria reforma en la composición y proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad para adecuarlo al marco internacional de hoy, no solo dando entrada a nuevos países en su seno, sino también cuestionando el derecho de veto de las cinco potencias que actualmente lo tienen. Asimismo, implica colocar realmente al Consejo de Derechos Humanos al mismo nivel que los otros dos, mejorando sus capacidades para vigilar su cumplimiento por parte de todos los miembros de la Organización y para sancionar a quien viole las reglas de juego. Por desgracia, y al igual que ocurría en el párrafo anterior, es obligado constatar que sigue faltando un impulso generalizado entre los 193 miembros de la ONU para avanzar en esa dirección.

Por último, conscientes de que los gobiernos nacionales ya no son los únicos actores del actual escenario internacional y de que no cabe esperar que, hipotecados por intereses geopolíticos y geoeconómicos y superados en muchos casos por dinámicas transnacionales que superan sus capacidades individuales, vayan a centrar su esfuerzo principal en la necesaria reforma que se plantea en estas páginas, es necesario apelar directamente a la sociedad civil organizada. Eso supone, en términos generales, emplear nuestra doble condición de consumidores y ciudadanos, para informarnos, sensibilizarnos y movilizarnos con la clara intención de acelerar el necesario cambio de paradigma. Una tarea común a la altura de los valores y principios que nos definen como humanos. Nos va en ello nuestra propia supervivencia como especie.